

mandada de la demanda contra ella formulada, y sin imposición de las costas causadas en este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el "Boletín Oficial del Estado", todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956. («Boletín Oficial del Estado» número 383).

Lo que, por la presente Orden ministerial, digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 22 de abril de 1974.

COLOMA GALLEGOS

Excmo. Sr. Teniente General. Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

## MINISTERIO DE HACIENDA

**9193** *ORDEN de 15 de abril de 1974 por la que se dispone la ejecución de sentencia del Tribunal Supremo recaída en el recurso número 301.014/72, interpuesto por «Iberoamericana del Embalaje, Sociedad Anónima», por impuesto sobre las Rentas del Capital, ejercicio de 1964 a 1967.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 301.014/72, interpuesto por «Iberoamericana del Embalaje, Sociedad Anónima», contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de noviembre de 1971, referente al Impuesto sobre las Rentas del Capital, ejercicios de 1964 a 1967, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en 1 de octubre de 1973, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso número 301.014 de 1972, interpuesto por la Sociedad mercantil «Iberoamericana del Embalaje, S. A.», contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 24 de noviembre de 1971, sobre liquidación definitiva por el Impuesto sobre las Rentas del Capital, ejercicios de 1964 a 1967, debemos declarar y declaramos que dicho acuerdo está ajustado al ordenamiento jurídico, por lo que no debe ser anulado; sin hacer declaración alguna sobre las costas en este recurso.»

No existiendo ninguna de las causas de suspensión o inejecución establecidas en el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Este Ministerio acuerda que el preinserto fallo sea cumplido en sus propios términos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 15 de abril de 1974.—P. D., José López Muñoz González Madroño.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos.

**9194** *ORDEN de 15 de abril de 1974 por la que se dispone la ejecución de sentencia del Tribunal Supremo, recaída en el recurso número 28.248/1970, interpuesto por don Domingo López Alonso, por impuesto sobre las Rentas del Capital, ejercicios 1958 y 1959.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 18.248/1970, interpuesto por don Domingo López Alonso, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 28 de abril de 1970 referente a liquidación girada por el Impuesto sobre la Renta del Capital, ejercicios 1958 y 1959, la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en 20 de noviembre de 1973, cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el presente recurso, anulamos y dejamos sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central de 28 de abril de 1970, así como el fallo del Tribunal Económico-Administrativo de la provincia de Madrid de 23 de septiembre de 1966, y la liquidación practicada por la oficina gestora en 15 de junio de 1962, que deberá practicarse de nuevo aplicando el tipo del 26,4 por 100 a las cantidades de 300.000 pesetas, ejercicio 1958, y 200.000

pesetas, ejercicio 1959, y al tipo del 22 por 100 sobre la base de 3.561.630 pesetas, ejercicio de 1958, previa deducción del 25 por 100 de la base, respetando las restantes partidas de la liquidación que se anula y con derecho a la devolución de la diferencia resultante, caso de haber sido ingresada, sin imposición de costas.»

No existiendo ninguna de las causas de suspensión o inejecución establecidas en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Este Ministerio acuerda que el preinserto fallo sea cumplido en sus propios términos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 15 de abril de 1974.—P. D., José López Muñoz González Madroño.

Ilmo. Sr. Director general de Impuestos.

**9195** *ORDEN de 22 de abril de 1974 por la que se concede a la Empresa «Industrias del Papel y de la Celulosa, S. A.» (INPACSA), los beneficios fiscales previstos para la acción concertada del Sector Papel.*

Ilmos. Sres.: Vista el acta de concierto suscrita entre el Ministerio de Industria y la Empresa «Industrias del Papel y de la Celulosa, S. A.» (INPACSA), como consecuencia de haberse estimado por dicho Ministerio la solicitud presentada por la Empresa, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 5.º de la base 7.ª de las contenidas en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 17 de julio de 1964, así como la documentación complementaria que se acompaña.

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica, y con lo dispuesto en el artículo 46, 3, del Decreto 1541/1972, de 15 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social, ha tenido a bien disponer:

1.º Conceder, a los efectos del concierto celebrado por la Empresa «Industrias del Papel y de la Celulosa, Sociedad Anónima» (INPACSA), los siguientes beneficios fiscales, por un plazo improrrogable de cinco años a partir de la fecha de publicación de la presente Orden.

a) Libertad de amortización de las instalaciones que se señalan en el anexo técnico del acta, durante los primeros cinco años, a partir del comienzo del primer ejercicio económico, en cuyo balance aparezca reflejado el resultado de la exploración industrial de las nuevas instalaciones o ampliación de las existentes.

b) Reducción del 95 por 100 del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grave las aportaciones, con motivo de las ampliaciones de capital de la Empresa concertada que se prevean en el plan financiero.

c) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios y del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que grave las importaciones de bienes de equipo y utillaje de primera instalación que correspondan a inversiones previstas en este acta, siempre que se acredite, por el oportuno certificado del Ministerio de Industria, que tales bienes no se fabrican en España.

Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación a bienes de equipo que se fabriquen en España.

d) Reducción del 95 por 100 de la cuota de la licencia fiscal que la Entidad concertada deba satisfacer por las nuevas instalaciones durante el período de instalación de las mismas.

e) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del Capital que graven el rendimiento de los empréstitos previstos en el programa financiero formulado por la Entidad concertada, así como del que recaiga sobre los intereses de los préstamos u operaciones de créditos previstos en el mismo, siempre que éstos se convengan por la Empresa concertada con Organismos internacionales o con Bancos o Instituciones financieras extranjeras.

La aplicación concreta de este beneficio a las operaciones de crédito indicadas se tramitará en cada caso en la forma establecida por las Ordenes del Ministerio de Hacienda de 9 de julio de 1971 y 11 de octubre de 1965.

Será preciso, de acuerdo con lo previsto en el Decreto-ley de 18 de octubre de 1961, se acredite el destino de tales recursos a la financiación de las inversiones reales nuevas a que se refiere el Anexo financiero, así como el cumplimiento de lo establecido en la Orden ministerial citada.

2.º Los beneficios anteriormente concedidos serán de aplicación a las instalaciones y proyectos que figuran en el acta de que se ha hecho referencia, teniendo en cuenta los planes financieros y técnicos que se acompañan como anexos, los cuales formarán con aquélla un solo documento con igual validez y eficacia.

3.º El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de la Entidad concertada dará lugar, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.º del artículo 48 del vigente texto refundido de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social, a la suspensión de los beneficios que se le otorgan y, por consiguiente, al abono o reintegro de los impuestos bonificados y de los créditos concedidos y entregados.

No obstante, la Administración podrá no considerar incumplimiento, a los efectos de su sanción, con la pérdida de los beneficios concedidos, aquel que no alcance una trascendencia que repercuta en forma considerable en el conjunto de la parte del programa correspondiente a la Empresa concertada.

En este supuesto, la Administración podrá sustituir la sanción de pérdida de los beneficios por otra de carácter pecuniario, que se impondrá, previa instrucción del oportuno expediente, en la forma que se indica en el apartado 5.º de esta Orden.

4.º En los casos en que el incumplimiento fuera debido a fuerza mayor o riesgo imprevisible o a demora por parte de la Administración en la resolución de las cuestiones de las que pudiera depender el cumplimiento, no se producirá la suspensión de los beneficios si se acreditara debidamente, a juicio del Ministerio de Industria, la realidad de la causa de involuntariedad mencionada.

5.º Para la determinación del incumplimiento se instruirá un expediente sumario por la Dirección General correspondiente, en el que informará la Comisión Asesora y de Vigilancia del Concerto, y al que se incorporará la documentación pertinente. Tras conceder vista del mismo a la Entidad concertada y un plazo de quince días para que exponga cuanto considere pertinente, la Dirección General propondrá al Ministro la resolución que proceda.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 22 de abril de 1974.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, José López-Muñiz González-Madroño.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Economía Financiera.

9196

ORDEN de 22 de abril de 1974 por la que se conceden a las Empresas que se mencionan los beneficios fiscales que establece el Decreto 1716/1973, de 30 de junio, por el que se aprueba el III Programa de la Red Frigorífica Nacional.

Ilmos. Sres.: Vistas las resoluciones del Ministerio de Industria de fecha 19 de diciembre de 1973 y 21 y 22 de febrero del corriente año por las que se declaran las instalaciones proyectadas por la Empresa «Conservas Aja, S. A.», emplazada en San Vicente de la Barquera (Santander), como incluidas en el grupo de «Frigoríficos generales», «Frigoríficos del Comercio Mayorista», grupo 2.º, a las de la Empresa «Hijos de Juan Antonio Prieto, S. R. C.», emplazadas en Molina de Segura (Murcia), como «Frigoríficos anejos a factorías de conservas vegetales», grupo IV, y a las de ampliación de la Empresa «Frigoríficos de Tarragona, S. A.», emplazadas en el polígono industrial Francolí (Tarragona), como «Frigoríficos generales comerciales», grupo II del artículo 4.º del Decreto 1716/1973, de 30 de junio, por el que se aprueba el III Programa cuatrienal de la Red Frigorífica Nacional.

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el apartado 4.º de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de enero de 1965, y con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica del Departamento, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.º Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva del Decreto 1716/1973, de 30 de junio, y al procedimiento señalado por la Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las Empresas «Conservas Aja, S. A.», en San Vicente de la Barquera (Santander); «Hijos de Juan Antonio Prieto, S. R. C.», en Molina de Segura (Murcia), y «Frigoríficos de Tarragona, S. A.», en el polígono industrial Francolí (Tarragona), por las instalaciones indicadas y por un plazo de cinco años, contados a partir de la publicación de la presente Orden, los siguientes beneficios fiscales:

a) Libertad de amortización durante el primer quinquenio a partir del ejercicio en que se inicie la explotación industrial de la Empresa.

b) Reducción del 95 por 100 de la cuota de licencia fiscal durante el período de instalación.

c) Reducción del 95 por 100 en la base del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en los términos establecidos en el número 3 del artículo 68 del texto refundido de 9 de abril de 1967.

d) Reducción del 95 por 100 de los derechos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que gravan la importación de bienes de equipo y utillaje de primera instalación, cuando no se fabriquen en España, así como los materiales y

productos que, no produciéndose en España, se importen para su incorporación de bienes de equipo de fabricación nacional.

e) Reducción del 50 por 100 del Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la Empresa española y de los préstamos que la misma concierte con Organismos internacionales o con Bancos o Instituciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se destinen a financiar inversiones reales nuevas.

La aplicación concreta de este beneficio a las operaciones de crédito indicadas se tramitará en cada caso a través de la Dirección General de Política Financiera, de conformidad con lo dispuesto en la Orden ministerial de 9 de julio de 1971, en la forma establecida por la Orden de este Ministerio de 11 de octubre de 1965.

2.º El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asumen las Empresas beneficiarias dará lugar a la privación de los beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los impuestos bonificados.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 22 de abril de 1974.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, José López-Muñiz González-Madroño.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Economía Financiera.

9197

ORDEN de 22 de abril de 1974 relativa a cambio de titularidad en la Empresa «Enrique Hidalgo Sánchez», acogida a la acción concertada, ganado vacuno de carne.

Ilmos. Sres.: Por Orden del Ministerio de Agricultura de 15 de diciembre de 1973, se autoriza el cambio de titularidad en las actas de concerto, ganado vacuno de carne, suscritas entre dicho Departamento y la Empresa «Enrique Hidalgo Sánchez», sita en Mérida (Badajoz).

En su virtud, este Departamento, de conformidad con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Declarar aplicables las Ordenes de 26 de julio de 1971 y 9 de abril de 1973, que concedieron los beneficios fiscales previstos para la acción concertada, ganado vacuno de carne, a la Empresa «Enrique Hidalgo Sánchez», a la que en ella se subroga la Empresa «Juan Luis Marín Gómez», como consecuencia del cambio de titularidad autorizado a favor de este último por la indicada Orden del Ministerio de Agricultura.

Dichas Ordenes ministeriales continuarán vigentes en todo lo demás en sus propios términos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. II. muchos años.

Madrid, 22 de abril de 1974.—P. D., el Subsecretario de Hacienda, José López-Muñiz González-Madroño.

Ilmos. Sres. Subsecretarios de Hacienda y de Economía Financiera.

9198

ORDEN de 22 de abril de 1974 por la que se autoriza la subrogación en los beneficios fiscales a determinadas Empresas acogidas a la acción concertada, Sector ganado vacuno de carne.

Ilmos. Sres.: Por Ordenes ministeriales de Agricultura de fechas 3 de noviembre y 17 de diciembre de 1973 y 4 de enero de 1974, se autorizan cambios de titularidad en las actas de concerto, sector ganado vacuno de carne, suscritas en las siguientes Empresas: «Grupo Sindical de Colonización número 7.876», «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», y «Cooperativa Provincial del Campo y Ganaderos de Cáceres», cuyo lugar pasan a ocupar las Empresas «Carnes y Despieces, S. A.», «Landazar, S. A.» y «Mataderos Frigoríficos Ganaderos, S. A.» (MAFRICASA), respectivamente.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada por la Secretaría General Técnica, acuerda lo siguiente:

Autorizar la subrogación de las Empresas concertadas «Carnes y Despieces, S. A.», «Landazar, S. A.», y «Mataderos Frigoríficos Ganaderos, S. A.» (MAFRICASA), en los beneficios fiscales concedidos por las Ordenes de este Departamento de 30 de abril de 1966 y 17 de noviembre de 1973, a las Empresas también concertadas «Grupo Sindical de Colonización número 7.876», «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, S. A.» y «Cooperativa Provincial del Campo y Ganaderos de Cáceres», que seguirán vigentes en sus propios términos, sin más alteraciones que las de extender el beneficio de la reducción del